

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**RAMA JUDICIAL**

**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**

**SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, veintisiete (27) de enero de dos mil veintitrés (2023)**

Cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, se procede a dictar la sentencia que corresponde, en este proceso adelantado por HECTOR ALONSO GUISADO GARCIA, EIDER MARTINEZ ACEVEDO, JOSE SAMUEL HENAO CARMONA, MARCO FIDEL CADAVID, JOAQUIN GUILLERMO OCHOA GÓMEZ, y como sucesores procesales del señor URAN DE JESÚS ARBOLEDA ARANGO actúan EDILMA MARÍA VILLA HERNÁNDEZ, LEIDY JOHANA ARBOLEDA VILLA, LAURA ESTEFANY ARBOLEDA VILLA, JEIMY ALEXANDRA ARBOLEDA VILLA, JHONATAN DENNIS ARBOLEDA VILLA y MICHEL ARBOLEDA VILLA en contra de PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A. (Radicado 05001-31-05-005-2017-00688-00). En calidad de Litisconsortes necesarios por pasiva a TEMPORALES UNO A BOGOTA S.A.S. y EMAX S.A.S.

**ANTECEDENTES**

Pretenden los demandantes se declare que, con la convocada a juicio, existió una relación laboral regida bajo un contrato de trabajo a término indefinido, desde la fecha de ingreso de cada uno de ellos y hasta el 30 de agosto de 2014 y el 22 de octubre de 2016 para el señor Joaquín Guillermo Ochoa Gómez, terminado de manera unilateral, inconstitucional, ilegal e injusto; en consecuencia, se condene a la demandada al reconocimiento y pago de la indemnización convencional prevista en el artículo 4° de la Convención Colectiva de Trabajo a los demandados; indexación de las condenas; costas del proceso y agencias en derecho. En subsidio, previas iguales declaraciones, se condene al reconocimiento y pago de

la indemnización por despido sin justa causa previsto en el artículo 64 del C.S. del T., a los demandados; la indexación de las condenas y costas y agencias en derecho.

Aspiraciones que sustentaron en que ingresaron a trabajar al servicio de la demandada unos por intermedio de la Cooperativa de Trabajo Asociado Alianza Humana y otros por intermedio de la temporal Atempí, relación laboral que fue declarada por el Juzgado a término indefinido hasta el 30 de septiembre de 2011; posteriormente fueron trasladados por disposición de la demandada a la Empresa de Servicios Temporales UNO A S.A., a partir del 1° de octubre de 2011, continuando con la misma modalidad de contratación sabiendo que ya habían sido condenados judicialmente declarando la existencia de una relación de trabajo mediante contrato a término indefinido; en el transcurso de la relación se vincularon con las cooperativas y con las empresas de servicios temporales no por su propia voluntad, sino por las exigencias de los directivos de Productos Químicos Panamericanos S.A.; con ocasión de ello instauraron demanda contra la Sociedad PQP S.A., en el año 2013, la que fue conocida por el Juzgado Civil del Circuito de Girardota en la que solicitaron se declarara la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido a partir de la fecha de ingreso de cada uno y, en consecuencia, se les pagaran los salarios y prestaciones sociales y prestaciones extralegales, proceso que fue resuelto mediante sentencia del 22 de agosto de 2013, en la que se declaró la existencia de la relación de trabajo sin solución de continuidad mediante contrato a término indefinido con la demandada y se ordenó el pago de las prestaciones adeudadas, decisión que fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín; se encontraban afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Química Farmacéutica “SINTRAQUIM”, lo que los hace beneficiarios de la convención colectiva de trabajo vigente en la empresa y de las cláusulas normativas; el lugar de prestación de los servicios es el Municipio de Girardota (Ant), en las instalaciones de la demandada, no obstante el domicilio de esta es la Ciudad de Medellín; el 27 de agosto de 2014, a los demandantes les fue notificado por parte de “EMAX” la terminación del contrato, argumentando un supuesto contrato “por duración de obra o labor contratada”, y que la terminación del contrato se hacía efectiva a partir del 30 de agosto de 2014, desconociendo de manera arbitraria la sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Girardota; no obstante, únicamente al señor Joaquín Guillermo Ochoa Gómez la demandada lo vinculó posteriormente

mediante contrato de trabajo a término fijo por 3 meses a partir del 23 de octubre de 2014, cumpliéndose con las prórrogas de ley para luego convertirse en contrato a término fijo por un año, sin embargo, el 12 de septiembre de 2016 le notificaron la no prórroga del contrato, posteriormente el 21 de octubre de 2016 le informaron que si sería prorrogado, pero extrañamente de manera verbal le indicaron que no sería prorrogado; al momento de la terminación del contrato de trabajo devengaban los siguientes salarios o el superior que se demuestre en el proceso: Urán de Jesús Arboleda Arango \$1.107.812; Eider Martínez Acevedo \$779.384; Héctor Alonso Guisado García \$721.061; José Samuel Henao Carmona \$779.384; Marco Fidel Cadavid \$721.061, todos estos para el año 2014, y el señor Joaquín Guillermo Ochoa Gómez \$790.000 para el año 2016; durante la relación laboral siempre prestaron un servicio misional y permanente, bajo la subordinación de Productos Químicos Panamericanos; el despido realizado por la empresa resulta inconstitucional, ilegal e injusto, por cuanto los contratos fueron terminados unilateralmente sin que mediara justa causa y sin ser indemnizados, aduciendo para su terminación un supuesto contrato por duración de obra o labor contratada en virtud del contrato comercial existente entre PQP y EXMAX S.A.S., a sabiendas de la existencia de la relación laboral a término indefinido declarada judicialmente entre los demandantes y PQP sin solución de continuidad; el 12 de agosto de 2016 se presentó escrito a la demandada con la finalidad de interrumpir la prescripción respecto de Uran de Jesús Arboleda Arango, Eider Martínez Acevedo, Héctor Alonso Guisado García, José Samuel Henao Carmona y Marco Fidel Cadavid, por cuanto la terminación del contrato del señor Joaquín Guillermo Ochoa Gómez ocurrió el 21 de octubre de 2016.

Al contestar la demanda, Productos Químicos Panamericanos se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Sobre los hechos indicó que eran ciertos los que hacían referencia a que la justicia ordinaria laboral declaró una relación laboral pero solamente hasta el 30 de septiembre de 2011, obligaciones que fueron transadas el 27 de mayo de 2016; la relación laboral con el señor Ochoa Gómez y el salario que este devengó y la presentación de las reclamaciones el 12 de agosto de 2016, excepto el señor Ochoa Gómez. Negó todo lo relativo a que después del 30 de septiembre de 2011 haya existido alguna relación laboral con los demandantes y que fueron “despedidos”. Formuló como excepciones las de inexistencia de vínculo laboral con la empresa PQP después del 30 de septiembre de 2011, lo que conduce a una falta de legitimación en la causa por pasiva, a partir

del 1° de octubre de 2011 y en lo sucesivo; inexistencia de intermediación ilegal; cosa juzgada (a través de acta de transacción); prescripción e inexistencia de despido por parte de PQP.

Mediante auto del 18 de febrero de 2019, el juzgado de conocimiento, que lo es el Quinto Laboral del Circuito de Medellín, resolvió integrar de manera oficiosa en calidad de Litis consortes necesarios por pasiva a UNO A BOGOTA S.A. y EMAX S.A.S.

Temporales UNO A Bogotá S.A.S., dio respuesta al libelo, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones. De los hechos adujo respecto de la mayoría de ellos que no le constaban, aceptando solo el de la presentación de las reclamaciones, pero aclarando que estas se realizaron frente a PQP. Como excepción previa propuso la de prescripción extintiva y de mérito las de buena fe del empleador, cobro de lo no debido y prescripción.

De igual manera, la sociedad EMAX S.A.S, a través de curador, dio respuesta a la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones. Dijo que no le constaban los hechos. Como excepciones formuló las de prescripción, inexistencia de la relación laboral, la genérica, buena fe de los Litis consortes necesarios por pasiva, compensación y pago y la innominada.

En sentencia del 26 de noviembre de 2021, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, declaró probada la excepción perentoria de TRANSACCIÓN-COSA JUZGADA formulada por PQP S.A. respecto a las pretensiones formuladas por los señores Urán de Jesús Arboleda Arango, Marco Fidel Cadavid, José Manuel Henao Carmona, Héctor Alonso Guisado García y Eider Martínez Acevedo y declaró probada la excepción de Inexistencia de despido injusto respecto del señor Joaquín Guillermo Ochoa Gómez, en consecuencia, ABSOLVIÓ a Productos Químicos Panamericanos S.A., a Temporales UNO A BOGOTÁ S.A.S, y a EMAX S.A.S. de todas las pretensiones formuladas en su contra por la parte actora, a quienes les impuso las costas del proceso, fijándoles como agencias en derecho la suma de \$100.000 a cargo de cada uno de los demandantes y a favor de la empresa PQP S.A.

Tal determinación no fue recurrida por las partes, por lo que la Sala conoce del asunto en el grado jurisdiccional de Consulta, que se surte en favor de los demandantes, como así lo ordena el artículo 69 del CPTSS.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

### CONSIDERACIONES

No existe discusión en que los demandantes, antes del proceso que ahora se define, habían demandado a PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS, para lograr no solo la declaración judicial de la existencia del contrato de trabajo entre la fecha de inicio de labores de cada uno y como extremo final para todos el del 30 de septiembre de 2011, sino también el pago de prestaciones sociales legales y convencionales, demanda que fue conocida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardota bajo el radicado 053083103001201300022, en la que se acogieron las pretensiones incoadas, decisión que luego de ser censurada por las partes fue confirmada y modificada por este Tribunal Superior, con ponencia del Magistrado Francisco Arango Torres, tras considerar que entre los litigantes se presentó el vínculo sustancial deprecado, providencia que fue dictada el 30 de octubre de 2015 que cobró ejecutoria el 24 de noviembre de ese mismo año.

En ese contexto, el problema jurídico al que se enfrente la Sala en esta oportunidad, se circunscribe a determinar si se ajusta o no a derecho, la decisión absolutoria de primer nivel, lo que dependerá de la presencia o no de la transacción-cosa juzgada.

Pues bien, como se sabe, la configuración de la cosa juzgada se determina cotejando, entre otras, a una transacción que ha hecho tránsito a cosa juzgada con otro proceso, para reconocer en ellos una triple identidad: de objeto: que ambos versen sobre la misma pretensión; de causa: que tengan como sustento los mismos fundamentos o hechos jurídicos; y de partes: esta implica la concurrencia al proceso de las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada (artículo 303 del CGP).

Al respecto, en la sentencia T-534 de 2015, la Corte Constitucional señaló la hermenéutica correcta de la figura en comento, explicando que:

*“...cada identidad responde una pregunta<sup>1</sup>. Así, el objeto cuestiona sobre qué se litiga, la causa interroga por qué se demanda, y las partes indagan acerca de quiénes discuten las auto-atribuciones de derechos...En concreto, el objeto del proceso se identifica con las pretensiones que solicitan los ciudadanos a la administración de justicia, la resistencia a las mismas y por el pronunciamiento que realiza el órgano judicial en la parte resolutive de la sentencia frente al petitorio de la demanda. La causa petendi “hace referencia a las razones que sustentan las peticiones del demandante ante el juez. Es así como la causa petendi contiene, por una parte, un componente fáctico constituido por una serie de hechos concretos y, de otro lado, un componente jurídico, constituido no sólo por las normas jurídicas a las cuales se deben adecuar los hechos planteados sino, también, por el específico proceso argumentativo que sustenta la anotada adecuación. En suma, es posible afirmar que la causa petendi es aquel grupo de hechos jurídicamente calificados de los cuales se busca extraer una concreta consecuencia jurídica”<sup>2</sup>. (...) [!] Identidad de partes es que al proceso concurren las mismas partes de la decisión que constituye cosa juzgada, ósea (sic) debe existir identidad jurídica de los mismos”*

Y más adelante, añadió:

*“...De igual forma, la Corte ha comprendido que las nuevas pruebas que surgen después de la decisión tomada eliminan la posibilidad de que opere la cosa juzgada en una demanda posterior con base en los mismos hechos y pretensiones<sup>3</sup>. Lo anterior, en razón de que los medios de convicción son nuevos hechos. En esos casos, el balance constitucional ha indicado que se configura un defecto fáctico.”*

Con base en esa orientación, se tiene que, como bien lo advirtió el *a quo*, los hoy demandantes ya habían demandado a PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A, para que, a través del proceso ordinario laboral, se declarara que su relación estuvo regida por un contrato de trabajo con dicha sociedad, dado que en su sentir, prestaron sus servicios en favor de aquella ejecutando las labores que a cada uno de ellos les era encomendada, proceso anterior que fue definido en sentencias ejecutoriadas, en las que se consideró que entre los litigantes concurrió el contrato de trabajo, porque en general la actividad

---

<sup>1</sup> T-162 de 1998.

<sup>2</sup> Ibídem. Y sentencia T-218 de 2010,

<sup>3</sup> Sentencias T-1226 de 2004, T-411 de 2004, T-584 de 2008 y T-352 de 2012.

de los demandantes fue subordinada respecto de la pasiva, sentencias que fueron dictadas respectivamente el 22 de agosto de 2013 y 30 de octubre de 2015, y en las que se definió como fecha de finalización de los contratos el 30 de septiembre de 2011.

Ahora, con este nuevo proceso, los demandantes pretenden se declare la existencia nuevamente de la relación laboral, teniendo en cuenta para ello como fecha de inicio de la relación laboral las mismas descritas en el proceso primigenio, pero como extremo final, para la mayoría de ellos, el del 30 de agosto de 2014, por cuanto las pretensiones del señor Joaquín Guillermo Ochoa Gómez son hasta el 22 de octubre de 2016.

En el expediente obra un “CONTRATO DE TRANSACCIÓN LABORAL”, suscrito entre “PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A. -EN REORGANIZACIÓN-” y el señor “SANDRO SÁNCHEZ SALAZAR”, como apoderado judicial de los señores “URAN DE JESÚS ARBOLEDA ARANGO, MARCO FIDEL CADAVID, JOAQUIN GUILLERMO OCHOA GÓMEZ, JOSÉ SAMUEL HENAO CARMONA, HÉCTOR ALONSO GUISAO GARCIA, ÓSCAR DARIO VANEGAS CADAVID, JOSÉ OMAR BEDOYA VALENCIA, WILDER GIOVANI JARAMILLO BEDOYA, EIDER MARTÍNEZ ACEVEDO, MAURICIO QUINTANA AGUDELO, DIEGO ALONSO ORTEGA VANEGAS, Y LUIS FERNANDO HERNÁNDEZ MEJÍA”, sin que pueda determinarse la fecha de este, pero en el que al menos el señor Urán de Jesús Arboleda Arango deja asentado que lo hizo el 27 de mayo de 2016, y en el escrito del mismo se adquirieron unos compromisos por parte de la empresa y en favor de los demandante para ser cumplidos “...en dos cuotas mensuales de igual valor cada una prevista para el día 31 de mayo y el día 30 de junio de 2016...”, dando indicios que los compromisos fueron adquiridos en dicha anualidad.

Este contrato definió como objeto en su cláusula primera el que *“Las partes convienen transigir en forma definitiva el fallo proferido por juzgado Civil del Circuito de Girardota, confirmado por el Tribunal Superior de Medellín-Sala laboral, mediante el cual se condena a PQP, y en general todas aquellas diferencias pasadas y presentes de carácter laboral”,* y más adelante, se continúa diciendo en la cláusula segunda *“Contraprestación económica a favor de los DEMANDANTES. En contraprestación por la transacción aquí convenida, la cual*

*tiene como finalidad terminar cualquier diferencia entre las partes asociada con el fallo en mención, así como precaver cualquier otro proceso judicial de carácter laboral, PQP se obliga a pagar al demandante la suma única de SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO NUEVE PESOS (\$68.447.109 M.L), valor que corresponde a un 75% de la totalidad de la condena proferida”.*

Bajo esta óptica, resulta claro para esta Sala de Decisión Laboral, contrario a lo asentado por el juez de instancia, que en el asunto no existen los elementos para declarar la cosa juzgada, por cuanto no se avizora el cumplimiento de los parámetros para declararla probada conforme lo dispuesto por el artículo 303 del Código General del Proceso.

Y se dice lo anterior por cuanto analizado en detalle el contrato de transacción que obra en el expediente, se evidencia que lo allí transigido corresponde a las condenas que le fueron impuestas a PQP en el proceso que fue adelantado por los aquí demandantes en el Juzgado Civil del Circuito de Girardota y que surtió trámite en este Tribunal por la interposición de los recursos, sin que se pueda entender por ninguna circunstancia que lo señalado en la cláusula primera respecto a que “...y en general todas aquellas diferencias pasadas y presentes de carácter laboral”, tengan alguna relación con las pretensiones que mediante este proceso quieren hacer valer los demandantes.

No puede perderse de vista que la transacción en materia laboral resulta viable cuando se encuentran de por medio derechos inciertos y discutibles, por lo tanto, susceptible de ser transigidos, a más para que exista debe de cumplir con unos requisitos como son que verse, como se dijo, sobre este tipo de derechos, que las partes celebrantes del contrato tengan capacidad de ejercicio, que el consentimiento de estas no adolezca de vicios y que recaiga sobre un objeto lícito y una causa lícita.

De igual manera, se tiene que la transacción resulta válida cuando posee un objeto lícito y determinado, por lo que cuando el objeto de la transacción no resulta determinado, el juzgador no puede ejercer ningún control sobre su validez en los términos del artículo 15 del Código Sustantivo del Trabajo.



Siendo lo anterior cierto, no puede aceptarse que el asunto materia de transacción suscrito entre las partes en documento obrante entre folios 245 a 249 del expediente, tenga alguna injerencia frente a las pretensiones enlistadas en esta demanda, por cuanto la indeterminación que se agrega tanto en la cláusula primera como en la segunda tendientes a precaver “...todas aquellas diferencias pasadas y presentes de carácter laboral”, no puede entenderse para este caso que se hayan incluido las diferencias de carácter laboral que se presentaron entre las partes luego de la declaratoria de relación laboral definida en las sentencias judiciales ejecutoriadas, pues ampliar el alcance de lo transigido en el contrato celebrado, es hacerle decir a los celebrantes de la transacción algo que, en específico, ellos no lo expresaron, por lo que habrá lugar entonces al análisis de las pretensiones enlistadas en la demanda.

Frente al asunto, baste decir que no es tema de discusión que mediante sentencias ejecutoriadas, se declaró la existencia de una relación laboral entre las partes desde la fecha de inicio de labores de cada uno de ellos y hasta el 30 de septiembre de 2011, estando de por medio la intermediación de la Cooperativa de Trabajo Asociado Alianza Humana, asunto sobre el cual esta Sala de Decisión no hará ningún análisis por cuanto tal debate ya hizo tránsito a cosa juzgada, quedando pendiente por verificar si entre las partes existió una relación de carácter laboral a partir del 1° de octubre de 2011 y hasta el 30 de agosto de 2014, y para el señor Joaquín Guillermo Ochoa Gómez, hasta el 22 de octubre de 2016, teniendo en cuenta que los servicios prestados por los demandantes durante ese tiempo lo fue a través de diferentes empresas.

Para resolver este debate, debe indicarse que resulta de especial importancia lo señalado por los artículos 22, 23 y 24 del C.S. del T, en tanto estas disposiciones remiten al concepto y elementos esenciales de un contrato de trabajo, indicándose en la última disposición normativa lo siguiente:

*“Presunción. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo”.*

Esta presunción, lo ha reiterado la jurisprudencia laboral en muchas de sus providencias, se trata de una ventaja probatoria para quien invoque su condición de trabajador, pero admite prueba en contrario, lo que se traduce en que si se

pretende demostrar la existencia de otro vínculo contractual, civil, comercial o administrativo, que dé pie a la ausencia del elemento subordinación o dependencia jurídica, o la ausencia de remuneración, la carga de prueba corre por cuenta del empleador, teniendo en cuenta para ello lo dispuesto por el artículo 167 del CGP.

De ahí que, para la configuración del contrato de trabajo se requiere que en la actuación procesal esté plenamente demostrada la actividad personal, y en lo que respecta a la continuada subordinación jurídica, que es el elemento característico y diferenciador de toda relación de trabajo, debe igualmente estar evidenciada. Sin embargo, no será necesaria la acreditación de la citada subordinación, con la producción de la respectiva prueba, en los casos en que se encuentre debidamente comprobada la prestación personal del servicio, ya que en este evento lo pertinente, es hacer uso de la presunción legal aludida con posibilidad de ser demostrado el hecho contrario, es decir, que el servicio no se prestó bajo un régimen contractual de índole laboral.

Para dar respuesta a este asunto, se debe empezar por decir que la sociedad PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS S.A., suscribió con la sociedad TEMPORALES UNO-A BOGOTA S.A., un contrato de prestación de servicios de suministro de personal en misión, obligándose esta última “...a colaborar con el USUARIO en la prestación de servicios temporales para atender incrementos de producción, reemplazos de personas en áreas de producción, mantenimiento y oficina”, el cual fue firmado a los 26 días del mes de septiembre de 2011.

Con sustento en dicho contrato, la sociedad TEMPORALES UNO A BOGOTA S.A., envió en misión a los aquí demandantes a partir del 1° de octubre de 2011 y hasta el 26 de septiembre de 2012, quienes dentro de dicho lapso de tiempo ocuparon específicamente los siguientes cargos en la demandada:

EIDER MARTÍNEZ ACEVEDO	:	Auxiliar de Almacén
HÉCTOR ALONSO GUIADO GARCÍA	:	Operario
JOSE SAMUEL HENAO CARMONA	:	Operario
URAN DE JESÚS ARBOLEDA ARANGO	:	Mecánico
MARCO FIDEL CADAVID	:	Operario
JOAQUIN GUILLERMO OCHOA GÓMEZ	:	Operario

De igual manera, se evidencia del material probatorio que entre la sociedad PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS S.A. y la sociedad EMAX S.A.S se suscribió un contrato comercial, el cual finalizó el 30 de agosto de 2014.

Con base en ese contrato, la sociedad EMAX S.A.S vinculó a los aquí demandantes mediante “...*contrato laboral por DURACIÓN DE LA OBRA O LABOR CONTRATADA*”, desde septiembre 27 de 2012, con el fin de que prestaran sus servicios a órdenes de Productos Químicos Panamericanos, y hasta el 30 de agosto de 2014, dada la finalización del contrato comercial.

Bajo estos supuestos, y teniendo en consideración los testimonios rendidos al interior del plenario, principalmente el del señor Ever de Jesús Marulanda, quien fungía como supervisor de los accionantes, en los que indican que a partir del 1° de octubre de 2011 estos continuaron desarrollando las mismas e idénticas labores a las que hacían durante el tiempo en que fue declarado el contrato de trabajo por vía judicial, es decir, que se continuaron presentando las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto de las cuales la judicatura encontró demostrada la relación laboral, pues la única diferencia era el cambio de las empresas contratantes de los accionantes y, en tal sentido, ellos no estaban laborando en la demandada en razón a un incremento en la producción o en las ventas como lo señala el señor Horacio Alexander Palomino en su testimonio, dado el tiempo laborado por estos a la sociedad PQP, por lo que la participación de la cooperativa de trabajo en el proceso primigenio fue solamente de mera intermediación, situación que continuó cumpliéndose luego de haberse cambiado de supuesto empleador, pues no desconoce esta Sala de Decisión la vinculación de los demandantes tanto a TEMPORALES UNO-A BOGOTA S.A., como a EMAX S.A.S., pero que dadas las circunstancias que envuelven el asunto, nada distinto se puede concluir que la sociedad demandada es la verdadera empleadora de los demandantes y que dichas sociedades actuaron como simples intermediarias, pues tal condición no se desvirtúa por el simple cambio de la sociedad empleadora sino que se desprende de las verdaderas formas que envolvieron la relación laboral que se dio entre las partes, por lo que habrá lugar a declarar la existencia de una relación laboral de los accionantes con la sociedad Productos Químicos Panamericanos a partir del 1° de octubre de 2011 y hasta el 30 de agosto de 2014.

Tampoco puede perderse de vista que resulta contrario a derecho vincular a una serie de trabajadores a través de empresas de servicios temporales cuando estos han venido cumpliendo funciones propias de la empresa, por cuanto tales empresas solo pueden actuar para cumplir actividades excepcionales y temporales de las empresas, y nada distinto se puede desprender del hecho que los accionantes hayan estado vinculados con la demandada hasta por períodos superiores a 5 años antes de iniciar labores con TEMPORALES UNO-A BOGOTA S.A. Al respecto, téngase en cuenta lo señalado por la Sala de Casación Laboral en sentencia SL4099-2021, donde se indicó:

*“Por otro lado, a través de providencia CSJ SL 2710-2019, se adoctrinó que las empresas de servicios temporales pueden ser utilizadas para cumplir las actividades excepcionales y temporales previstas en la norma en cita, sean o no del giro habitual de sus negocios, pero no para cubrir necesidades permanentes de la empresa usuaria o sustituir personal permanente”*

En cuanto a la indemnización por despido sin justa causa, comienza por recordar la Sala para abordar este aspecto de disenso que, el contrato de trabajo puede llegar a su fin por diferentes razones; bien porque mutuamente lo acuerdan las partes o bien por la decisión unilateral de alguna de ellas con justa o sin justa causa (Art 61 y siguientes del CST).

Así mismo se recuerda que cuando se pretende por vía judicial la indemnización por terminación unilateral e injusta del contrato, le corresponde al trabajador demostrar el despido, y al empleador para desligarse de tal obligación, la justa causa comprobada que lo llevó a tomar esa decisión (Ver SL1077 del 25 de enero de 2017).

De igual manera, por sabido se tiene a partir del artículo 66 del CST, que “.../la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar a la otra, en el momento de la extinción, la causal o motivo de esta determinación...”, sin que posteriormente puedan alegarse válidamente otras razones o motivos. Entonces para derivar la consecuencia deprecada, se hace necesario: (i) verificar cuáles fueron las razones para esta determinación del empleador, y (ii) auscultar el material probatorio recaudado, para confrontar si dichas causales o motivos fueron acreditadas y configuran justa causa de despido, o si por el contrario no se logró demostrar ello.

Retomando el caso concreto, es indiscutido que la relación laboral que se dio entre las partes terminó por una decisión que tomó quien fungía como empleador, esto es, EMAX S.A.S. quien, mediante misiva del 27 de agosto de 2014, le comunicó a los accionantes como argumento para dar por terminado el contrato lo siguiente:

*“1. El contrato comercial existente entre PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS y EMAX S.A.S., finalizará a partir del día TREINTA (30) DE AGOSTO de 2014 inclusive.*

*2. De acuerdo con lo anterior es necesario efectuar la terminación de su contrato individual de trabajo en la modalidad -POR DURACIÓN DE LA OBRA O LABOR CONTRATADA-, de acuerdo a lo establecido expresamente en los artículos 45 y 61, numeral 1, literal d) del Régimen Laboral Colombiano -Por terminación de la obra o labor contratada-“*

Siendo esta la razón para dar por terminado la relación contractual, y habiéndose declarado mediante esta providencia que la relación que unió a las partes es de carácter indefinido, y quien actuó como verdadero empleador es Productos Químicos Panamericanos S.A., la culminación de la relación laboral resulta a todas luces injusta, por cuanto las razones jurídicas expuestas en la comunicación no resultan aplicables a este tipo de vinculación, siendo entonces la consecuencia para resarcir tal situación la de la indemnización bien convencional ora legal.

Frente a la aplicación de una u otra, encuentra esta Sala de Decisión que al interior del plenario obran sendas afiliaciones de los accionantes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Química y/o farmacéutica de Colombia - SINTRAQUIM-, siendo la mayoría del 3 de marzo del año 2012, y del 22 del mismo mes y año para el señor Joaquín Guillermo Ochoa Gómez, afiliaciones que fueron debidamente notificadas al Ministerio de Trabajo.

Cabe destacar que entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Química y/o farmacéutica de Colombia -SINTRAQUIM- y la sociedad Productos Químicos Panamericanos, suscribieron, para lo que interesa a este proceso, una convención colectiva de trabajo con vigencia desde el 1° de abril de 2013 hasta el 31 de marzo del año 2015 (fl. 99), señalando en su artículo 4° respecto de la indemnización por despido injusto lo siguiente:

**“ESTABILIDAD-TABLA INDEMNIZATORIA**

*Cuando la Empresa, de por terminado un contrato de trabajo sin justa causa comprobada, pagará al trabajador despedido la indemnización que a continuación se cita:*

- a) Si el trabajador tuviere un tiempo de servicio en la Empresa no mayor de un (1) año, la Empresa le pagará setenta y seis (76) días de salario promedio.*
- b) Si el trabajador tuviere más de un (1) año de servicios y menos de cinco (5) años de servicios, la Empresa la pagará cuarenta y un (41) días de salario promedio, adicionales sobre los setenta y seis (76) días del literal (a), por cada uno de los años subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción.*

*(...)”*

Ahora, con el ánimo de realizar los cálculos correspondientes, esta Sala de Decisión analizó las diferentes probanzas obrantes al interior del plenario, encontrando que como salario para el momento de la terminación de la relación laboral, los accionantes devengaban los siguientes rubros: Urán de Jesús Arboleda Arango \$1.107.812 (fl. 27), Marco Fidel Cadavid \$721.061 (fl. 152), y Eider Martínez Acevedo, Héctor Alonso Guisado, José Manuel Henao Carmona, al no aparecer registro de lo devengado por ellos, el salario mínimo del año 2014.

Así las cosas, las indemnizaciones convencionales ascienden a los siguientes montos:

Uran de Jesús Arboleda Arango	:	\$5.581.885
Marco Fidel Cadavid	:	\$3.633.185
Eider Martínez Acevedo	:	\$3.103.818
Héctor Alonso Guisado	:	\$3.103.818
José Manuel Henao Carmona	:	\$3.103.818

Estas sumas de dinero se deberán de indexar por la entidad vencida desde el 1 de septiembre de 2014 y hasta la fecha efectiva del pago, teniendo en cuenta para ello la fórmula establecida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Frente a las pretensiones del señor Joaquín Guillermo Ochoa Gómez, debe señalarse que si bien estas están encaminadas a que se declare la relación laboral

con la demandada hasta el 22 de octubre de 2016, es claro que el vínculo laboral se mantuvo hasta esa data por cuanto Productos Químicos Panamericanos S.A. le suscribió un contrato a término definido por 3 meses a partir del 23 de octubre de 2014, quedando prorrogado a un año a partir del 23 de octubre de 2015, dadas las renovaciones de las que fue objeto, y que mediante aviso que le fue entregada por el empleador el 12 de septiembre de 2016, le indicó textualmente que *“Por medio de la presente comunicación, informo a usted, que su contrato de trabajo a término fijo, inferior a un año, que vence el 22 de octubre de 2016, no será prorrogado, ni renovado”*, siendo esta una manera legal de dar por finalizado la relación contractual entre las partes, por cuanto el aviso fue entregado incluso con anticipación al término establecido por el numeral 1º) del artículo 46 del C.S del T., para dar por terminado este tipo de contratos.

En consecuencia, se REVOCARÁ y CONFIRMARÁ la sentencia de primer grado. Costas de las instancias a favor de los demandantes que obtuvieron sentencia condenatoria (art. 365-4 del CGP). Como agencias en derecho en ésta se fija la suma de un salario mínimo legal mensual vigente.

**DECISIÓN:**

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia consultada, de fecha y procedencia conocidas frente a la declaratoria de transacción-cosa juzgada, para en su lugar DECLARAR que entre la sociedad PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A. y los señores URAN DE JESÚS ARBOLEDA ARANGO, representados por sus sucesores inicialmente señalados, EIDER MARTÍNEZ ACEVEDO, HÉCTOR ALONSO GUISADO, JOSÉ SAMUEL HENAO CARMONA y MARCO FIDEL CADAVID se presentó una relación regida por un contrato de trabajo a término indefinido entre el 1º de octubre de 2011 y el 30 de agosto de 2014, el cual terminó de manera injusta y, en consecuencia, se CONDENA a PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS a pagarle a los demandantes las siguientes sumas de dinero por concepto de indemnización por despido injusto:

Uran de Jesús Arboleda Arango	:	\$5.581.885
Marco Fidel Cadavid	:	\$3.633.185

Eider Martínez Acevedo	:	\$3.103.818
Héctor Alonso Guisado	:	\$3.103.818
José Manuel Henao Carmona	:	\$3.103.818

Tales sumas deberán ser indexadas por la accionada conforme lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.

Se CONFIRMA en lo demás.

Costas de las instancias a cargo de Productos Químicos Panamericanos y a favor de los demandantes que obtuvieron sentencia condenatoria. Como agencias en derecho se fija la suma de un SMLMV. Sin costas en esta instancia en lo que se refiere al señor JOAQUIN GUILLERMO OCHOA GÓMEZ.

Notifíquese la presente decisión por EDICTO (numeral 3° del literal d, del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y AL2550-2021, CSJ).

Los Magistrados,

  
CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES

  
VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

  
SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**  
**SALA LABORAL**



**SECRETARÍA**  
**EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

<b>Radicación:</b>	<b>05001310500520170068801</b>
<b>Proceso:</b>	<b>ORDINARIO LABORAL</b>
<b>Demandante:</b>	<b>LAURA ESTEFANY ARBOLEDA VILLA Y OTROS</b>
<b>Demandado:</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.</b>
<b>M. P.</b>	<b>CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES</b>
<b>Fecha de fallo:</b>	<b>27/01/2023</b>
<b>Decisión:</b>	<b>REVOCA</b>

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 30/01/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario